

38ª REUNION — 7ª SESION EXTRAORDINARIA - 18 DE ABRIL DE 1985

**Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDISON OTERO, y del señor vicepresidente 1º,
doctor RAMÓN A. ARAUJO**

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN

SENADORES PRESENTES:

AMOEDO, Julio A.
ARAUJO, Ramón A.
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
FALSONE, José A.
FERIS, Gabriel
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARINI, Celestino A.
MARTIARENA, José H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MURGUÍA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle

RODRIGUEZ SAA, Alberto J.
SALIM, Luis
SAPAG, Elías
TRILLA, Juan
VELAZQUEZ, Héctor J.
VILLADA, Francisco R.
WOODLEY, Kenneth W.

AUSENTES, CON AVISO:

ALMENDRA, Ramón A.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
CASTRO, Jorge A.
CELLI, Felipe
DE LA RÚA, Fernando
LECONTE, Ricardo G.
MATHUS ESCORIHUELA, Miguel A.
MAUHUM, Fernando H.
MENEM, Eduardo
SAADI, Vicente L.
SANCHEZ, Libardo N.
SIGAL, Humberto C.
SOLANA, Jorge D.
VIDAL, Manuel D.

AUSENTE, CON LICENCIA:

BENÍTEZ, Alfredo L.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I. — Mensajes del Poder Ejecutivo en los que solicita acuerdos y retira otros pliegos. (Pág. 3746.)
- II. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de Sede entre la República Argentina y el Acuerdo Sudamericano de Estupeficientes y Psicotrópicos. (Pág. 3746.)
- III. — Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 3748.)
- IV. — Comunicaciones oficiales. (Pág. 3756.)
- V. — Dictámenes de comisiones. (Pág. 3757.)
- VI. — Peticiones particulares. (Pág. 3757.)
- VII. — Proyecto de ley de la señora senadora Malharro de Torres y otros señores senadores por el que las mujeres embarazadas gozarán de una oportunidad de empleo en empresas del Estado y reparaciones oficiales. (Pág. 3758.)
- VIII. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Velázquez y Lafferrière por el que se solicita la reglamentación de la ley 23.091 (Locaciones urbanas). (Página 3759.)
- IX. — Proyecto de comunicación del señor senador León por el que se solicita la puesta en funcionamiento de la estación terrena de Resistencia. (Pág. 3760.)
- X. — Proyecto de ley del señor senador Bravo Herrera por el que se otorga una pensión a la señora Cruz Herrera. (Pág. 3760.)
- XI. — Proyecto de ley del señor senador Bravo Herrera por el que se otorga una pensión a la señora Carmen Erazo. (Pág. 3760.)
- XII. — Proyecto de comunicación del señor senador Falsone por el que se solicita la provisión con carácter de urgente de un alojamiento para la Asociación Pro Readaptación Integral del Mogólico Hena E. Yanzón (APRIM). (Pág. 3761.)
- XIII. — Proyecto de comunicación de los señores senadores Sapag y Solana por el que se solicita la sanción del decreto de radicación de la Planta de Fertilizantes Nitrogenados (Fertineu) en Neuquén. (Página 3761.)
- XIV. — Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez y otros señores senadores por el que se solicita la clarificación de la situación del personal de defensa

y seguridad federal respecto a su inscripción en los planes habitacionales. (Página 3762.)

- XV. — Proyecto de ley de los señores senadores Nápoli y Mazzucco por el que se transfieren a la Municipalidad de Ingeniero Huergo, Río Negro, terrenos pertenecientes al Ferrocarril Nacional General Roca. (Pág. 3762.)
 - XVI. — Proyecto de ley del señor senador Britos sobre asociaciones sindicales. (Pág. 3763.)
 - XVII. — Proyecto de ley del señor senador Brasco por el que se establece la participación de obreros en la dirección de empresas estatales, mixtas y privadas. (Página 3774.)
- 2.—A moción del señor senador Falsone se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor por el que se requiere la donación de un inmueble a la Asociación pro Readaptación Integral del Mogólico Hena E. Yanzón (APRIM). (Pág. 3775.)
 - 3.—A moción del señor senador Sapag se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación de los señores senadores Sapag y Solana sobre radicación de una planta de fertilizantes nitrogenados en Neuquén. (Pág. 3776.)
 - 4.—A moción del señor senador Brasco se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita la garantía para la producción de insulina ante el cierre de la empresa Eli Lilly. (Pág. 3781.)
 - 5.—A moción del señor senador Martiarena se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del señor senador Mathus Escorihuela y otros señores senadores tendiente a preservar la permanencia de la población andina de Alerces en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. (Pág. 3784.)
 - 6.—Moción de preferencia formulada por el señor senador Britos para considerar en la próxima sesión el proyecto de ley en revisión, referido a la colegiación de abogados. Se aprueba. (Pág. 3785.)
 - 7.—Manifestaciones de los señores senadores Amodeo y Berhongaray referidas a una declaración sancionada el 7 de marzo de 1984 por el Honorable Senado sobre repudio de pronósticos publicitados por empresas multinacionales y otros sectores internos, que significan atentar contra la estabilidad del sistema institucional del país. (Pág. 3785.)
 - 8.—Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes relacionados con los convenios colectivos de trabajo del personal ferroviario. Se aprueba. (Pág. 3787.)

- 9.—Consideración del dictamen de la **Comisión de Obras Públicas** en el proyecto de comunicación del señor senador **Falsone** por el que se solicita la reparación de los muelles del **Puerto Viejo**, en la localidad de **Eldorado**, provincia de **Misiones**. Se aprueba. (Pág. 3788.)
- 10.—Consideración del dictamen de las comisiones de **Obras Públicas** y de **Combustibles** en el proyecto de resolución del señor senador **Salim** por el que se solicita la ampliación del gasoducto que posee la provincia de **Santiago del Estero** y pasa por las localidades de **Arraga**, **Nueva Francia** y **Villa San Martín**. Se aprueba. (Pág. 3789.)
- 11.—Consideración del dictamen de las comisiones de **Asuntos Administrativos y Municipales** y de **Educación** en el proyecto de ley del señor senador **Celli** por el que se solicita la sustitución del artículo 13, apartado II, inciso a), del decreto sobre acumulación de cargos docentes a las funciones superiores de gobierno. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 3790.)
- 12.—Consideración del dictamen de las comisiones de **Economías Regionales**, de **Industria** y de **Presupuesto y Hacienda** en el proyecto de resolución del señor senador **Sigal** y otros señores senadores por el que se solicita la designación de una Comisión Especial para el Estudio del Desarrollo de la Región al Sur del Río Colorado. Se aprueba. (Pág. 3791.)
- 13.—Consideración del dictamen de la **Comisión de Relaciones Exteriores y Culto** en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se aprueba el convenio comercial entre los gobiernos de la República Argentina y de la República de Guatemala, suscrito en Buenos Aires el 7 de octubre de 1982. Se aprueba. (Pág. 3793.)
- 14.—Consideración de los dictámenes de la **Comisión de Trabajo y Previsión Social** por los que se aprueban: I) el proyecto de comunicación por el que se solicita se declare de interés nacional las **IX Jornadas Nacionales de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Primeras del Norte Argentino** que tendrán lugar en la ciudad de **Salta** del 25 al 27 de abril de 1985, y II) el proyecto de resolución sobre adhesión a las **IX Jornadas Nacionales de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Primeras del Norte Argentino** que tendrán lugar en la ciudad de **Salta** del 25 al 27 de abril de 1985. Se aprueban con modificaciones. (Pág. 3795.)
- 15.—Consideración del dictamen de la **Comisión de Trabajo y Previsión Social** en el proyecto de comunicación del señor senador **Britos** por el que se solicitan informes sobre los acuerdos salariales suscritos por cámaras empresarias o asociaciones de empleadores. Se aprueba. (Pág. 3797.)
- 16.—Consideración del dictamen de la **Comisión de Trabajo y Previsión Social** en la nota presentada por el Concejo Deliberante de **Quilmes**, Buenos Aires, en la que solicita la solución de los conflictos laborales planteados en diversas empresas de esa localidad. Se aprueba. (Pág. 3797.)
- 17.—Consideración del dictamen de la **Comisión de Minería** en el proyecto de comunicación de los señores senadores **Gómez Centurión**, **Woodley** y **Sánchez** por el que se solicita la declaración de interés nacional del **V Congreso Internacional de Geología Aplicada a la Ingeniería**, a realizarse en Buenos Aires entre el 20 y el 25 de octubre de 1986. Se aprueba. (Pág. 3798.)
- 18.—Consideración del dictamen de las comisiones de **Presupuesto y Hacienda** y de **Vivienda** en el proyecto de comunicación del señor senador **Gil** por el que se solicitan informes respecto de la aplicación de impuestos inmobiliarios. Se aprueba. (Página 3799.)
- 19.—Consideración del dictamen de la **Comisión de Presupuesto y Hacienda** en el proyecto de comunicación del señor senador **Vidal** por el que se solicita la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias del proyecto de ley en revisión sobre desgravación de inversiones en activos muebles productivos. Se aprueba. (Pág. 3801.)
- 20.—Consideración del dictamen de la **Comisión de Presupuesto y Hacienda** en el proyecto de resolución del señor senador **Salim** por el que se solicita la postergación del plazo de las partidas presupuestarias acordadas a la provincia de **Santiago del Estero**. Se aprueba. (Pág. 3802.)
- 21.—Consideración del dictamen de la **Comisión de Economía** en el proyecto de comunicación de los señores senadores **Malharro de Torres** y **Mathus Escorihuela** por el que se solicita el otorgamiento de una línea de créditos a largo plazo y bajo interés a productores agropecuarios de los departamentos declarados en estado de emergencia por el reciente terremoto en la provincia de **Mendoza**. Se aprueba. (Pág. 3803.)
- 22.—Consideración del dictamen de las comisiones de **Interior y Justicia**, y de **Presupuesto y Hacienda** en el proyecto de comunicación de los señores senadores **Martíarena** y **Benítez** por el que se solicita la construcción del edificio para el Juzgado Federal de **San Salvador de Jujuy**. Se aprueba. (Pág. 3803.)
- 23.—Consideración del dictamen de la **Comisión de Vivienda** en el proyecto de ley en revisión por el que se prorrogan hasta el 31 de mayo de 1985 los plazos establecidos en el artículo 8º de la ley 23.073 (compra de lotes sujetos al régimen de la ley 14.005). Se aprueba con modificaciones. (Página 3804.)
- 24.—Consideración del dictamen de las comisiones de **Presupuesto y Hacienda** y de **Educación** en el proyecto de resolución de las señoras senadoras **Martíarena** y **Benítez** por el que se solicita la plena vigencia de la ley 20.843 y su decreto reglamentario sobre pagos por padrinzago presidencial. Se aprueba. (Pág. 3805.)
- 25.—Consideración del dictamen de las comisiones de **Obras Públicas** y de **Energía** en el proyecto de comunicación del señor senador **Velázquez** y otros señores senadores por el que se solicita que el

Poder Ejecutivo informe sobre los montos pagados por la Entidad Binacional Yacyretá en concepto de indemnización a propietarios de terrenos afectados por las obras. Se aprueba. (Pág. 3807.)

- 26.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aprobación del Acuerdo de Cooperación Económica, Industrial y Financiera entre la República Argentina y la República Italiana. Se aprueba. (Pág. 3807.)
- 27.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre el Acuerdo de Sede entre la República Argentina y el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos. Se aprueba. (Pág. 3810.)
- 28.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre la República Argentina y la República de El Salvador. Se aprueba. (Pág. 3813.)
- 29.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de los señores senadores Menem y Sánchez sobre medidas referentes a la pesca en la zona de exclusión fijada por Gran Bretaña. Se aprueba. (Pág. 3816.)
- 30.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de los señores senadores Rivas y Araujo por el que se solicitan informes acerca de posibles negociaciones con Gran Bretaña sobre un arrendamiento de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Se aprueba. (Pág. 3817.)
- 31.—Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 3818.)

—En Buenos Aires, a las 19 y 38 del jueves 18 de abril de 1985:

Sr. Presidente (Otero). — Queda abierta la sesión.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Otero). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados, que oportunamente fueron girados a las respectivas comisiones por la Presidencia, de acuerdo con la autorización conferida por este honorable cuerpo.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

I

Acuerdos

Mensajes del Poder Ejecutivo nacional por los que solicita acuerdos y retira otros pliegos. (A la Comisión de Acuerdos.)

II

Acuerdo de sede entre la República Argentina y el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Apruébase el acuerdo de sede entre la República Argentina y el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos, firmado en la ciudad de Buenos Aires el 16 de octubre de 1981, cuyo texto forma parte de la presente ley.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ACUERDO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL ACUERDO SUDAMERICANO SOBRE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

El Gobierno de la República Argentina (denominado en adelante el Gobierno), representado por Su Excelencia el señor Ministro de la Relaciones Exteriores y Culto, Doctor Oscar Camilión, y el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos (denominado en adelante "el Acuerdo"), representado por el señor Secretario Ejecutivo Doctor Carlos Norberto Cagliotti, teniendo presente que funciona en Buenos Aires la Sede de la Secretaría Permanente, y con el fin de garantizar el normal y eficaz desarrollo de sus actividades,

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1º

El Gobierno acepta la designación de la ciudad de Buenos Aires como Sede de la Secretaría Permanente del Acuerdo y de sus autoridades y se compromete a continuar facilitando el uso de los locales necesarios para su instalación y funcionamiento.

ARTICULO 2º

El Acuerdo gozará de personalidad jurídica en el ámbito jurisdiccional de la República Argentina con plena capacidad para actuar ante todas las autoridades públicas y contratar, adquirir bienes y disponer de ellos.

ARTICULO 3º

La Sede del Acuerdo, sus locales y dependencias, así como sus archivos, son inviolables y gozarán de protección especial.

ARTICULO 4º

El Acuerdo, sus bienes y haberes gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial o administra-

tivo, quedando exentos de cualquier forma de embargo, registro o cualquier injerencia o afectación por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa.

ARTICULO 5º

El Acuerdo, sus propiedades, bienes y haberes estarán exentos de toda clase de impuestos directos o contribuciones, ya sean federales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo. No obstante, no podrá reclamarse exención alguna respecto de contribuciones que, de hecho, constituyen una remuneración por servicios públicos efectivamente prestados, salvo que la exención se otorgue a otra organización similar.

ARTICULO 6º

El Acuerdo estará exento de derechos de aduana, de prohibiciones y restricciones respecto de los bienes que exporte e importe para uso oficial o que están destinados a sus programas asistenciales. Los bienes que se importen libres de derechos no podrán comercializarse sino conforme a las condiciones que se acuerden con el gobierno.

ARTICULO 7º

El Acuerdo podrá tener fondos o divisas corrientes de cualquier clase y llevar sus cuentas en cualquier divisa, así como transferir libremente los fondos y divisas de que disponga en territorio argentino a otros países y viceversa, sin que puedan ser afectados por disposición o moratorias de naturaleza alguna.

ARTICULO 8º

El Acuerdo disfrutará de un trato no menos favorable que el otorgado por el Gobierno a cualquier otro gobierno, inclusive sus misiones diplomáticas, en lo que respecta a las prioridades, tarifas e impuestos aplicables a la correspondencia, cablegramas, telegramas, radiogramas, telefotos, comunicaciones telefónicas y otras comunicaciones, como también a las tarifas de prensa para las informaciones destinadas a la prensa y la radio.

ARTICULO 9º

El Secretario Ejecutivo del Acuerdo, titular de la Secretaría Permanente, cuando no sea argentino, su cónyuge y familiares a su cargo que formen parte de su casa, tiene derecho a los privilegios e inmunidades que se reconocen a los Jefes de Misión diplomática acreditados ante el Gobierno y a los miembros de su familia, respectivamente.

ARTICULO 10

Todos los integrantes del personal del Acuerdo gozarán de inmunidad contra cualquier procedimiento respecto de todos los actos que ejecuten y de las expresiones orales o escritas que emitan en el desempeño de sus funciones. Serán inviolables los documentos y papeles oficiales que se encuentren bajo su poder. De igual modo, los sueldos, emolumentos o indemnizaciones que les pague el Acuerdo estarán exentos del pago de cualquier impuesto o contribución.

Los funcionarios del Acuerdo que no tengan nacionalidad argentina ni posean residencia permanente en

la República Argentina, gozan de inmunidad absoluta contra todo servicio nacional de carácter obligatorio; recibirán tanto ellos como sus familiares y dependientes facilidades en materia de inmigración y registro de extranjeros; en época de crisis internacionales gozarán de las mismas facilidades que los diplomáticos para abandonar el país, y podrán importar y exportar libres de derechos sus muebles y efectos en el momento que ocupen o abandonen el cargo en el Acuerdo.

Los privilegios e inmunidades se reconocen al personal del Acuerdo en beneficio de los fines del organismo. Por consiguiente éste podrá renunciar a los privilegios e inmunidades del personal en cualquier caso, cuando, según su criterio, su ejercicio impida el curso de la justicia, siempre que dicha renuncia no perjudique los intereses del Acuerdo.

ARTICULO 11

Los representantes, delegados asesores y técnicos como los demás miembros de las delegaciones a las reuniones, sesiones, conferencias, seminarios y congresos, convocados por razón del Acuerdo o acreditados por el Acuerdo en el extranjero, gozarán de inmunidad respecto de sus actos y opiniones oficiales, y junto con sus cónyuges y familiares a cargo, estarán eximidos de medidas restrictivas en materia de inmigración y de las formalidades sobre registro de extranjeros, igual tratamiento se acordará a enviados y observadores acreditados por terceros Estados u organismos internacionales ante el Acuerdo. Las personas designadas en el presente artículo deberán estar provistas de documento de viaje en regla. Si fuere preciso obtener visa para su ingreso al país, ésta se extenderá libre de gastos.

Asimismo, dispondrán de las facilidades normalmente otorgadas a los funcionarios diplomáticos, que sean necesarias para el desempeño de las mismas funciones.

ARTICULO 12

El Acuerdo se esforzará por respetar y hacer respetar por las personas a que se refiere este instrumento la legislación nacional argentina, y velará por evitar toda forma de injerencia en los asuntos internos de la República Argentina y todo abuso de los privilegios e inmunidades que se reconocen para los fines del Acuerdo.

Si el Gobierno estima que ha habido abuso de un privilegio o de una inmunidad otorgados por el presente Acuerdo de Sede se celebrarán consultas entre el Gobierno y el Acuerdo, a fin de determinar si se ha producido tal abuso y, de ser así, tratar de remediarlo y evitar su repetición.

ARTICULO 13

El Acuerdo comunicará al Gobierno una lista conteniendo los nombres de las personas que en cada caso se encuentren amparadas por privilegios e inmunidades, expidiendo éste la documentación pertinente. Igual procedimiento se aplicará respecto de toda modificación ulterior de dicha lista.

ARTICULO 14

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno comunique a la Secretaría Permanente

del Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos la aprobación del mismo, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales.

ARTICULO 15

El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento y podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante comunicación escrita a la otra. La denuncia producirá efectos al año de la fecha de su notificación.

HECHO en la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los dieciséis días del mes de octubre del año mil novecientos ochenta y uno, en dos ejemplares originales del mismo tenor, en idioma español, igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la
República Argentina

Oscar Héctor Camilión

Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto

Por el Acuerdo
Sudamericano sobre
Estupefacientes y
Psicotrópicos

Carlos Norberto Cagliotti
Secretario Ejecutivo

—A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

III

Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados

I

*Aumento del aporte al Fondo Africano de Desarrollo.
Proyecto de ley en revisión*

Buenos Aires, 10 de abril de 1985.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado en sesión de la fecha el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al Honorable Senado:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Apruébase el aumento del aporte de la República Argentina al Fondo Africano de Desarrollo en la suma de siete millones seiscientos veinte mil unidades de cuenta (U.C. 7 620.000) que equivalen a pesos argentinos siete millones seiscientos noventa y seis mil novecientos dos (\$a 7.696.902), según paridad cambiaría vigente al 1º de febrero de 1982.

Art. 2º — El pago de pesos argentinos siete millones seiscientos noventa y seis mil novecientos dos (\$a 7.696.902) será realizado en moneda libremente convertible sin mantenimiento de valor, con ajuste al programa de pagos correspondiente a la tercera reconstitución de recursos del Fondo Africano de Desarrollo adoptada por la Asamblea de Gobernadores mediante resolución 09-82 del 8 de mayo de 1982 (párrafo 5 a).

Art. 3º — Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar, en nombre y por cuenta del gobierno nacional, los aportes establecidos en la presente ley.

Art. 4º — Para el cumplimiento de lo indicado en el artículo precedente, el Banco Central de la República Argentina emitirá, en nombre y por cuenta del gobierno nacional, a la orden del Fondo Africano de Desarrollo, valores no negociables, sin interés, pagaderos a la vista por su valor nominal, que serán entregados a dicho organismo en sustitución de los aportes en efectivo, según lo establecido en el artículo 9º del acuerdo para la creación del Fondo Africano de Desarrollo y el párrafo 5 d de la mencionada resolución 09-82, que aprobó la tercera reconstitución de recursos.

Art 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.

—A las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda.

2

Reforma al Instituto de Patria Potestad y equiparación entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. — Proyecto de ley en revisión

Buenos Aires, 28 de marzo de 1985.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sustitúyense los artículos 77, 131 y 149 del Código Civil por los siguientes:

Artículo 77. — El máximo de tiempo del embarazo se presume que es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento. Esta presunción admite prueba en contrario.

Artículo 131. — Los menores que contrajeran matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas en el artículo 134.

Si se hubieren casado sin autorización no tendrán, hasta los veintiún años, la administración y disposición de los bienes recibidos o que recibirán a título gratuito, continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores, salvo ulterior habilitación.

Los menores que hubieren cumplido 18 años podrán emanciparse por habilitación de edad con su consentimiento y mediante decisión de quienes ejerzan sobre ellos la autoridad de los padres. Si se encontraran bajo tutela, podrá el juez habilitar-

los a pedido del tutor o del menor, previa sumaria información sobre la aptitud de éste. La habilitación por los padres se otorgará por instrumento público que deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Tratándose de la habilitación judicial bastará la inscripción de la sentencia en el citado registro.

La habilitación podrá revocarse judicialmente cuando los actos del menor demuestren su inconveniencia, a pedido de los padres, de quien ejercía la tutela al tiempo de acordarla o del Ministerio Pupilar.

Artículo 149. — Si el denunciado como demente fuere menor de edad, su padre o su madre o su tutor ejercerán las funciones del curador provisorio.

Art. 2º — Sustitúyese el título II de la sección II, del libro I del Código Civil (artículos 240 al 263) por las siguientes disposiciones:

TÍTULO II

De la filiación

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 240. — La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial.

La filiación matrimonial y la extramatrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este código.

Artículo 241. — El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas expedirá únicamente certificados de nacimiento que sean redactados en forma que no resulte de ellos si la persona ha sido o no concebida durante el matrimonio o ha sido adoptada plenamente.

CAPÍTULO II

Determinación de la maternidad

Artículo 242. — La maternidad quedará establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción deberá realizarse a petición de quien presente un certificado del médico u obstétrica que haya atendido el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del hijo. En caso de manifiesta pobreza o marginalidad, el oficial público podrá aceptar la prueba testimonial de dos vecinos que hayan tenido conocimiento del embarazo y del parto. La inscripción deberá serle notificada a la madre en forma personal y auténtica, salvo su reconocimiento expreso o que quien hubiese denunciado el nacimiento fuere el marido.

CAPÍTULO III

Determinación de la paternidad matrimonial

Artículo 243. — Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimo-

nio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución, anulación, divorcio o a la separación de hecho de los esposos. No se presume la paternidad del marido con respecto al hijo que naciere después de los trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio o de nulidad del matrimonio, salvo prueba en contrario.

Artículo 244. — Si mediaren matrimonios sucesivos de la madre se presume que el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y dentro de los ciento ochenta días de la celebración del segundo, tiene por padre al primer marido, y que el nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días de la celebración del segundo tiene por padre al segundo marido.

Las presunciones establecidas en este artículo admiten prueba en contrario.

Artículo 245. — En cualquier caso, el nacido será inscrito como hijo de los cónyuges si concurriere el consentimiento de ambos.

CAPÍTULO IV

Determinación y prueba de la filiación matrimonial

Artículo 246. — La filiación matrimonial queda determinada legalmente y se prueba:

1. Por la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba del matrimonio de los padres, de conformidad con las disposiciones legales respectivas.
2. Por sentencia firme en juicio de filiación.

CAPÍTULO V

Determinación de la paternidad extramatrimonial

Artículo 247. — La paternidad extramatrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal.

CAPÍTULO VI

Del reconocimiento de la filiación

Artículo 248. — El reconocimiento del hijo resultará:

1. De la declaración formulada ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente.
2. De una declaración realizada en instrumento público o privado debidamente reconocido.
3. De las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectuara en forma incidental.

Lo prescrito en el presente capítulo es aplicable a la madre cuando no hubiere tenido lugar la inscripción prevista en el artículo 242.

Artículo 249. — El reconocimiento efectuado es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo.

El reconocimiento del hijo ya fallecido no atribuye derechos en su sucesión a quien lo formula, ni a los demás ascendientes de su rama.

Artículo 250. — En el acto de reconocimiento es prohibido declarar el nombre de la persona con quien se tuvo el hijo, a menos que esa persona lo haya reconocido ya o lo haga en el mismo acto.

No se inscribirán reconocimientos que contradigan una filiación anteriormente establecida. Quien pretenda reconocer al hijo deberá, previa o simultáneamente, ejercer la acción de impugnación de la filiación establecida.

CAPÍTULO VII

Las acciones de filiación

Disposiciones generales

Artículo 251. — El derecho de reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están sujetos a prescripción.

Artículo 252. — Si la reclamación de filiación importa dejar sin efecto una filiación anteriormente establecida, deberá, previa o simultáneamente, ejercerse la acción de impugnación de esta última.

Artículo 253. — En las acciones de filiación se admitirán toda clase de pruebas, incluso las biológicas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte. La negativa a someterse a pruebas biológicas será una presunción que admite prueba en contrario.

CAPÍTULO VIII

Acciones de reclamación de estado

Artículo 254. — Los hijos pueden reclamar su filiación matrimonial contra sus padres, si ella no resultare de las inscripciones en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. En este caso, la acción deberá entablarse conjuntamente contra el padre y la madre. Los hijos pueden también reclamar su filiación extramatrimonial contra quien consideren su padre o su madre. En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá contra sus sucesores universales.

Estas acciones podrán ser promovidas por el hijo en todo tiempo.

Sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz. Si el hijo falleciere antes de transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o la plena capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar

la demanda, su acción corresponde a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dichos plazos.

Artículo 255. — En todos los casos en que un menor aparezca inscrito como hijo de padre desconocido, el Registro Civil efectuará la comunicación al Ministerio Público de Menores, quien deberá procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre. En su defecto podrá promover la acción judicial correspondiente si media conformidad expresa de la madre para hacerlo.

Artículo 256. — La posesión de estado debidamente acreditada en juicio tendrá el mismo valor que el reconocimiento expreso, siempre que no fuere desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico.

Artículo 257. — El concubinato de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción hará presumir su paternidad, salvo prueba en contrario.

CAPÍTULO IX

Acciones de impugnación de Estado

Artículo 258. — El marido puede impugnar la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, anulación, divorcio o separación de hecho, alegando que él no puede ser el padre o que la paternidad presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida en razón de pruebas que la contradicen. Para acreditar esa circunstancia podrá valerse de todo medio de prueba, pero no será suficiente la sola declaración de la madre.

Aun antes del nacimiento del hijo, el marido o sus herederos podrán impugnar preventivamente la paternidad del hijo por nacer. En tal caso la inscripción del nacimiento posterior no hará presumir la paternidad del marido de la madre sino en caso de que la acción fuese rechazada.

Artículo 259. — La acción de impugnación de la paternidad del marido podrá ser ejercida por éste y por el hijo. La acción del marido caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo. El hijo podrá iniciar la acción en cualquier tiempo.

En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso, la acción caducará para ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a correr en vida del marido.

Artículo 260. — El marido podrá negar judicialmente la paternidad del hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio. Si se probare que el marido tenía conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de su casamiento o si, luego del nacimiento, re-

conoció como suyo expresa o tácitamente al hijo o consintió en que se le diera su apellido en la partida de nacimiento, la negación será desestimada. Quedará a salvo, en todo caso, la acción de impugnación de la paternidad que autoriza el artículo 258.

Para la negación de la paternidad del marido rige el término de caducidad de un año.

Artículo 261. — La maternidad puede ser impugnada por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo.

Artículo 262. — La maternidad podrá ser impugnada en todo tiempo por el marido o sus herederos, por el hijo y por todo tercero que invoque un interés legítimo. La mujer podrá ejercer la acción cuando alegue sustitución o incertidumbre acerca de la identidad del hijo.

Artículo 263. — El reconocimiento que hagan los padres de los hijos concebidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los que tengan interés en hacerlo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados podrán ejercer la acción dentro de los dos años de haber conocido el acto de reconocimiento.

Art. 3º — Sustitúyese la denominación del título III de la sección II, del libro primero del Código Civil, por la siguiente:

TÍTULO III

De la autoridad de los padres

Art. 4º — Sustitúyese el artículo 264 por los siguientes:

Artículo 264. — La autoridad de los padres o patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y los bienes de sus hijos, para su protección y formación integral, que se ejercerá siempre en beneficio de éstos, desde su concepción y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado.

Ambos progenitores son titulares del ejercicio de la autoridad y se presumirá que los actos realizados por uno de ellos cuentan con el consentimiento del otro, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 264 bis o cuando mediare oposición expresa.

Cuando los progenitores no convivan, el ejercicio de la autoridad corresponderá al padre o madre que ejerza la tenencia, sin perjuicio del derecho-deber del otro de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación, salud y condiciones de vida. Sin embargo, se requerirá el consentimiento de ambos padres para los actos previstos en el artículo 264 bis. Si el progenitor que no ejerce la tenencia dedujera oposición a algún acto que ha dispuesto el otro en el ejercicio de la autoridad, resolverá el juez, como se establece en el primer párrafo del artículo 264 bis.

Artículo 264 bis. — En caso de disenso, oídos los padres y el menor adulto, resolverá el juez sumariamente atendiendo a los intereses del hijo y a la unidad familiar, por el procedimiento más breve

que prevea la ley local. Si los desacuerdos fueren reiterados o concurriere cualquier otra causa que entorpeciere gravemente el ejercicio de la autoridad de los padres, el juez sumariamente podrá atribuirla a uno de los progenitores por el plazo que fije, el que no podrá exceder de dos años.

El acuerdo expreso de ambos progenitores será necesario para los siguientes actos:

1. Autorización para contraer matrimonio.
2. Emancipación por habilitación de edad y su revocación.
3. Salida del territorio nacional.
4. Autorización para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad, si fueran menores de dieciocho años.
5. Disposición de los bienes inmuebles, muebles y derechos registrables del menor.

En todos estos casos, si uno de los padres no diera su consentimiento, o mediare imposibilidad para traerlo, resolverá el juez lo que convenga al interés del menor y a la unidad familiar. Si mediare imposibilidad de hecho ostensible y excepcional para obtener el consentimiento de uno de los progenitores, acreditada por información sumaria ante el juez del lugar, será suficiente la autorización de quien tiene consigo al hijo.

Artículo 264 ter. — Los derechos inherentes a la autoridad de los padres no corresponden al progenitor que no haya reconocido voluntariamente al hijo, pero aquél queda sujeto a la prestación alimentaria y demás obligaciones derivadas de dicha autoridad.

En caso de muerte de uno de los progenitores, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la autoridad de los padres o suspensión de su ejercicio, corresponde al otro ejercerla en forma exclusiva. Cuando ambos progenitores sean incapaces o estén privados de la autoridad o suspendidos en su ejercicio, los hijos menores quedarán sujetos a tutela. Si los padres de un hijo fueren menores no emancipados, se preferirá a quien ejerza la autoridad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado, subsistiendo en tal caso esa tutela aun cuando el otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de edad, salvo que a petición de éste el juez le discierna el ejercicio de la autoridad.

Art. 5º — Sustitúyense los artículos 265, 266, 267, 269, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 293, 294, 295, 297, 298, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 367, 368 y 373 por los siguientes:

Artículo 265. — Los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen éstos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino con los suyos propios.

Artículo 266. — Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados

están obligados a cuidarlos en su ancianidad y en estado de demencia o enfermedad y a proveer a sus necesidades, en todas las circunstancias de la vida en que les sean indispensables sus auxilios.

Tienen derecho a los mismos cuidados y auxilio los demás ascendientes.

Artículo 267. — La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.

Artículo 269. — Si el menor de edad se hallare en urgente necesidad, que no pudiere ser atendida por sus padres, los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos.

Artículo 271. — En caso de divorcio, separación de hecho o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimentos a sus hijos y educarlos, no obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos.

Artículo 272. — Si el padre o la madre faltaren a esta obligación, podrán ser demandados por la prestación de alimentos por el propio hijo si fuese adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera de los parientes, o por el ministerio de menores.

Artículo 274. — Los padres, sin intervención de sus hijos menores, pueden estar en juicio por ellos como actores o demandados. Los menores serán oídos si tuvieren más de 18 años.

También a nombre de sus hijos menores, los padres podrán celebrar cualquier contrato, en los límites de su administración, señalados en este código.

Artículo 275. — Los hijos menores no pueden dejar la casa de sus progenitores, o aquella que éstos les hubiesen asignado, sin licencia de sus padres.

Tampoco pueden, antes de haber cumplido 18 años de edad ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres.

Artículo 276. — Si los hijos menores dejasen el hogar, o aquel en que sus padres los hubiesen puesto, sea que ellos se hubiesen sustraído a su obediencia, o que otros los retuvieran, los padres podrán exigir que las autoridades públicas les presten toda la asistencia que sea necesaria para hacerles entrar bajo su autoridad. También podrán acusar criminalmente a los seductores o corruptores de sus hijos, y a las personas que los retuvieron.

Artículo 277. — Los padres pueden exigir que los hijos que están bajo su autoridad y cuidado les presten la colaboración propia de su edad, sin que ellos tengan derecho a reclamar pago o recompensa.

Artículo 278. — Los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos menores. El poder de corrección debe ejercerse

moderadamente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, castigos o actos que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los menores. Los jueces deberán resguardar a los menores de las correcciones excesivas de los padres, disponiendo su cesación y las sanciones pertinentes si correspondieren.

Artículo 282. — Si los padres o uno de ellos negaren su consentimiento al menor adulto para intentar una acción civil contra un tercero, el juez, con conocimiento de los motivos que para ello tuviera el oponente, podrá suplir la licencia, dando al hijo un tutor especial para el juicio.

Artículo 283. — Se presume que los menores adultos, si ejercieren algún empleo, profesión o industria, están autorizados por sus padres para todos los actos y contratos concernientes al empleo, profesión o industria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 131. Las obligaciones que de estos actos nacieren, recaerán únicamente sobre los bienes cuya administración y usufructo o sólo el usufructo, no tuvieren los padres.

Artículo 284. — Los menores adultos ausentes del hogar con autorización de los padres, o en un país extranjero, o en un lugar remoto dentro de la República, que tuviesen necesidad de recursos para su alimento u otras necesidades urgentes, podrán ser autorizados por el juez del lugar o por la representación diplomática de la República, según el caso, para contraer dudas que satisfagan las necesidades que padecieren.

Artículo 285. — Los menores no pueden demandar a sus padres sino por sus intereses propios, y previa autorización del juez, aun cuando tengan una industria separada o sean comerciantes.

Artículo 286. — El menor adulto no precisará la autorización de sus padres para estar en juicio, cuando sea demandado criminalmente, ni para reconocer hijos ni para testar.

Artículo 287. — El padre y la madre tienen el usufructo de los bienes de sus hijos matrimoniales, o de los extramatrimoniales voluntariamente reconocidos, que estén bajo su autoridad, con excepción de los siguientes:

1. Los adquiridos mediante su trabajo, empleo, profesión o industria, aunque vivan en casa de sus padres.
2. Los heredados por motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
3. Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o testador hubiera dispuesto que el usufructo corresponda al hijo.

Artículo 290. — Es implícita la cláusula de no tener los padres el usufructo de los bienes donados o dejados a los hijos menores, cuando esos bienes fuesen donados o dejados con indicación del empleo que deba hacerse de los respectivos frutos o rentas.

Artículo 293. — Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos que están bajo su potestad, con excepción de los siguientes:

1. Los que hereden con motivo de la indignidad o desheredación de sus padres.
2. Los adquiridos por herencia, legado o donación cuando hubieran sido donados o dejados por testamento bajo la condición de que los padres no los administren.

Artículo 294. — La administración de los bienes de los hijos será ejercida en común por los padres cuando ambos estén en ejercicio de la autoridad. Se presumirá que los actos realizados por uno cuentan con el consentimiento del otro, salvo oposición expresa.

Los padres podrán designar de común acuerdo a uno de ellos administrador de los bienes de los hijos, pero en ese caso el administrador necesitará el consentimiento expreso del otro para todos los actos que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos sobre la administración de los bienes, cualquiera de los padres podrá requerir al juez competente que designe a uno de ellos administrador.

Artículo 295. — La condición que prive a los padres de administrar los bienes donados o dejados a los hijos, no los priva del derecho al usufructo.

Artículo 297. — Los padres no pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí, ni por interpuesta persona, bienes de sus hijos aunque sea en remate público, ni constituirse en cesionarios de créditos, derechos o acciones contra sus hijos, a menos que las cesiones resulten de una subrogación legal, ni hacer partición privada con sus hijos de la herencia del progenitor prefallecido, ni de la herencia en que sean con ellos coherederos o colegatarios, ni obligar a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros.

Necesitan autorización judicial para: enajenar los bienes registrables de sus hijos, las rentas que estén constituidas sobre la deuda nacional, constituir derechos reales sobre los bienes registrables, transferir derechos reales que pertenezcan a sus hijos sobre bienes de terceros y hacer remisión voluntaria de derechos de sus hijos.

Artículo 298. — Igualmente necesitan autorización judicial para enajenar ganados de cualquier clase que formen los establecimientos rurales, salvo aquellos cuya venta es permitida a los usufructuarios que tienen el usufructo de los rebaños.

Artículo 303. — Removido uno de los padres de la administración de los bienes, ésta corresponderá al otro; si ambos fueren removidos, el juez la encargará a un tutor especial, y éste entregará a los padres, por mitades, el sobrante de las rentas de los bienes, después de satisfechos los gastos de administración, y de alimentos y educación de los hijos.

Artículo 306. — La autoridad de los padres se acaba:

1. Por la muerte de los padres o de los hijos.
2. Por profesión de los padres, o de los hijos, con autorización de aquéllos, en institutos monásticos.
3. Por llegar los hijos a la mayor edad.
4. Por emancipación legal de los hijos, sin perjuicio de la subsistencia del derecho de administración de los bienes adquiridos a título gratuito, si el matrimonio se celebró sin autorización.
5. Por emancipación dativa de los hijos sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación o nulidad.
6. Por dar en adopción los hijos, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación o nulidad de la adopción.

Artículo 307. — El padre o la madre, o ambos, quedarán privados de la autoridad en los siguientes supuestos:

1. Por ser condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices de un delito doloso contra la persona o los bienes de sus hijos o de alguno de ellos, o como autores, instigadores o cómplices de un delito cometido por sus hijos en forma conjunta o individual.
2. Por la exposición o el abandono malicioso que hicieren de sus hijos o de alguno de ellos, aun cuando éstos quedaren bajo guarda o fueren recogidos por el otro progenitor o un tercero.
3. Por poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica, o la moralidad de sus hijos, mediante malos tratos, ejemplos perniciosos, conducta notoria o delincuencia.

Artículo 308. — La privación de la autoridad de los padres podrá ser dejada sin efecto por el juez si los padres demostraran que, por circunstancias nuevas, la restitución se justifica en beneficio o interés de los hijos.

Artículo 309. — El ejercicio de la autoridad de los padres queda suspendido mientras dure la ausencia de los padres, judicialmente declarada conforme a los artículos 15 a 21 de la ley 14.394. También queda suspendido en caso de interdicción de alguno de los padres, o de inhabilitación según el artículo 152 bis, incisos 1 y 2, hasta que sea rehabilitado, y en los supuestos establecidos en el artículo 12 del Código Penal.

Podrá suspenderse el ejercicio de la autoridad en caso de que los hijos sean entregados por sus padres a un establecimiento de protección de menores. La suspensión será resuelta con audiencia de los padres, de acuerdo a las circunstancias del caso.

Artículo 310. — Perdida la autoridad por uno de los progenitores, o suspendido uno de ellos en su ejercicio, continuará ejerciéndola el otro. En su defecto, y no dándose el caso de tutela legal por pariente consanguíneo idóneo, en orden de grado excluyente, los menores quedarán bajo el patronato del Estado nacional o provincial.

Artículo 367. — Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden siguiente:

1. Los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados preferentemente los más próximos en grado, y a igualdad de grados los que estén en mejores condiciones para proporcionarlos.
2. Los hermanos y medio hermanos.

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca.

Artículo 368. — Entre los parientes por afinidad únicamente se deben alimentos aquellos que están vinculados en primer grado.

Artículo 373. — Cesa la obligación de prestar alimentos si los descendientes en relación a sus ascendientes, o los ascendientes en relación a sus descendientes, cometieren algún acto por el que puedan ser desheredados.

Art. 6º — Sustitúyese el capítulo III, sección II, libro I, del Código Civil (artículos 389, 390 y 391), por las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO III

De la tutela legal

Artículo 389. — La tutela legal tiene lugar cuando los padres no han nombrado tutor a sus hijos, o cuando los nombrados no entran a ejercer la tutela, o dejan de ser tutores.

Artículo 390. — La tutela legal corresponde únicamente a los abuelos, tíos, hermanos o medio hermanos del menor, sin distinción de sexos.

Artículo 391. — El juez confirmará o dará la tutela legal a la persona que por su solvencia y reputación fuese la más idónea para ejercerla, teniendo en cuenta los intereses del menor.

Art. 7º — Sustitúyense los artículos 392, 478 y 1.114 del Código Civil por los siguientes:

Artículo 392. — Los jueces darán tutela al menor que no la tenga asignada por sus padres y cuando no existan los parientes llamados a ejercer la tutela legal o cuando, existiendo, no sean capaces o idóneos o hayan hecho dimisión de la tutela o hubiesen sido removidos de ella.

Artículo 478. — El padre o la madre son curadores de sus hijos solteros o viudos que no tengan hijos mayores de edad que puedan desempeñar la curaduría.

Artículo 1.114. — El padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años. En caso de que los padres no convivan será responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor.

Art. 8º — Sustitúyense los artículos 3.412, 3.545, 3.565, 3.567, 3.570, 3.571, 3.572, 3.576 y 3.585 del Código Civil por los siguientes:

Artículo 3.412. — Los otros parientes llamados por la ley a la sucesión no pueden tomar la posesión

de la herencia, sin pedirla a los jueces y justificar su título a la sucesión.

Artículo 3.545. — Las sucesiones intestadas corresponden a los descendientes del difunto, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado, inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este código. No habiendo sucesores, los bienes corresponden al Estado nacional o provincial.

Artículo 3.565. — Los hijos del autor de la sucesión lo heredan por derecho propio y en partes iguales, salvo los derechos que en este título se dan al viudo o viuda sobreviviente.

Artículo 3.567. — A falta de hijos y descendientes heredan los ascendientes, sin perjuicio de los derechos declarados en este título al cónyuge sobreviviente.

Artículo 3.570. — Si han quedado viudo o viuda e hijos, el cónyuge sobreviviente tendrá en la sucesión la misma parte que cada uno de los hijos.

Artículo 3.571. — Si han quedado ascendientes y cónyuge supérstite, heredará éste la mitad de los bienes propios del causante y también la mitad de la parte de gananciales que corresponda al fallecido. La otra mitad la recibirá los ascendientes.

Artículo 3.572. — Si no han quedado descendientes ni ascendientes, los cónyuges se heredan recíprocamente, excluyendo a todos los parientes colaterales.

Artículo 3.576. — En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado a la sucesión en concurrencia con descendientes, no tendrá el cónyuge sobreviviente parte alguna en la división de bienes gananciales que correspondieran al cónyuge pre-fallecido.

Artículo 3.585. — No habiendo descendientes ni ascendientes, ni viudo o viuda, heredarán al difunto sus parientes colaterales más próximos, hasta el cuarto grado inclusive, salvo el derecho de representación para concurrir los sobrinos con sus tíos. Los iguales en grado heredarán por partes iguales.

Art. 9º — Sustitúyese la denominación del capítulo I, título IX, sección I, del libro IV del Código Civil, por la siguiente:

CAPÍTULO I

Sucesión de los descendientes

Art. 10. — Sustitúyense los artículos 3.593 y 3.594 del Código Civil por los siguientes:

Artículo 3.593. — La porción legítima de los hijos es cuatro quintos de todos los bienes existentes a la muerte del testador, de los que éste hubiera donado a terceros y de los que deban colacionarse a la masa de la herencia, observándose en su distribución lo dispuesto en el artículo 3.570.

Artículo 3.594. — La legítima de los ascendientes es de dos tercios de los bienes de la sucesión, de los que deban colacionarse a la masa de la herencia y de los donados a terceros, observándose en su distribución lo dispuesto por el artículo 3.571.

Art. 11. — Incorpórase como artículo 3.296 bis del Código Civil el siguiente:

Artículo 3.296 bis. — Es indigno de suceder al hijo, el padre o la madre que no lo hubiere reconocido voluntariamente durante la menor edad o que no le haya prestado alimentos y asistencia conforme a su condición y fortuna.

Art. 12. — Sustitúyese el artículo 10 de la ley 2.393 por el siguiente:

Artículo 10. — La mujer mayor de catorce años y el hombre mayor de dieciséis años, pero menores de edad, no pueden casarse entre sí, ni con otra persona, sin la autorización de sus padres o de aquel que ejerza la autoridad, o sin la de su tutor, cuando ninguno de ellos la ejerciere, o en su defecto, sin la del juez. Los sordomudos en las condiciones referidas, que no sepan darse a entender por escrito, necesitarán la autorización del curador o del juez.

Art. 13. — Sustitúyese el artículo 13 de la ley 10.903 por el siguiente:

Artículo 13. — La privación de la autoridad o la suspensión de su ejercicio, no importan liberar a los padres de las obligaciones impuestas por los artículos 265, 267 y 268 del Código Civil si no fueran indigentes.

Art. 14. — Sustitúyese el inciso 3º del artículo 19 de la ley 14.394 por el siguiente.

Artículo 19, inciso 3º — El padre o la madre.

Art. 15. — Sustitúyese el artículo 2º de la ley 18.248 por el siguiente:

Artículo 2º — El nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento. Su elección corresponde a los padres, a falta, impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro o a las personas a quienes los progenitores hubiesen dado su autorización para tal fin. En defecto de todo ello pueden hacerlo los guardadores, el ministerio público de menores o los funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Cuando una persona hubiese usado un nombre con anterioridad a su inscripción en el registro, se anotará con él siempre que se ajuste a lo prescrito en el artículo 3º.

Art. 16. — Sustitúyese el párrafo segundo del artículo 2º de la ley 19.134 por el siguiente:

Artículo 2º, párrafo segundo: El adoptante debe ser por lo menos dieciocho años mayor que el adoptado, salvo cuando el cónyuge superviviente adopta al hijo adoptado del premuerto.

Art. 17. — Sustitúyese el artículo 6º de la ley 19.134 por el siguiente:

Artículo 6º — El adoptante deberá haber tenido al menor bajo su guarda durante un año. Esta condición no se requiere cuando adopta al hijo o hijos de su cónyuge.

Art. 18. — Sustitúyense los artículos 11, inciso 1º y 12 del Código de Comercio por los siguientes.

Artículo 11, inciso 1º: Conteniendo autorización expresa del padre y de la madre.

Artículo 12. — El hijo mayor de dieciocho años, que fuese asociado al comercio del padre o de la madre, o de ambos, será reputado autorizado y mayor para todos los efectos legales en las negociaciones mercantiles de la sociedad.

La autorización otorgada no puede ser retirada al menor sino por el juez, a instancia del padre, de la madre, del tutor o ministerio pupilar, según el caso y previo conocimiento de causa. Este retiro, para surtir efecto contra terceros que no lo conocieren, deberá ser inscrito y publicado en el tribunal de comercio respectivo.

Art. 19. — Deróganse las siguientes disposiciones del Código Civil.

Artículos 273, 281, 289, 305, 311 al 344 (título IV y V de la sección II del libro I), 357, 358, 359, 365, 366, 369, 394 al 396, 402 (capítulo V, título VII, sección II, libro I), 3.577 al 3.584 (capítulos IV y V, título IX, sección I, libro IV), 3.596, 3.597, 4.029, 4.042 y 4.043.

Art. 20. — Derógase la ley 14.367.

Art. 21. — Siempre que en el Código Civil, leyes complementarias u otras disposiciones legales se alude a los hijos naturales, extramatrimoniales o ilegítimos en contraposición o para discriminar derechos o deberes respecto a los hijos legítimos, la situación de aquéllos deberá ser equiparada a la de éstos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 del Código Civil; y cuando en los mismos textos se alude al padre en ejercicio de la patria potestad, deberá entenderse que tal ejercicio corresponderá en lo sucesivo a los padres conjuntamente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 264 y siguientes del Código Civil.

Art. 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.

—A las comisiones de Legislación General y de Familia y Minoridad.

Sr. Brasesco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Como es necesario efectuar un estudio acerca de cuál es la Cámara de origen de este proyecto —recordemos que hay un mensaje del Poder Ejecutivo y la sanción del Senado—, solicito que sea girado también a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Otero). — Así se hará.

Continúa la lectura de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Macris). — (*Lee*):

3

*Donación de terreno al Reino de España. —
Sanción definitiva*

Buenos Aires 10 de abril de 1985.

Señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión sobre autorización otorgada a la Municipalidad de Buenos Aires para donar al Reino de España una fracción de terreno ubicada dentro de la superficie de su propiedad, destinado a la construcción de un liceo hispano-argentino de enseñanza primaria y secundaria y ha tenido a bien aprobarlo, quedando así definitivamente sancionado.

Dios guarde al señor presidente.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.

—A sus antecedentes.

4

Aprobación del Convenio Constitutivo del Banco Africano de Desarrollo. — Sanción definitiva

Buenos Aires, 10 de abril de 1985.

Señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión, por el cual se aprueba el Convenio Constitutivo del Banco Africano de Desarrollo y se autoriza el ingreso de la República Argentina a esa institución y ha tenido a bien aprobarlo, quedando así definitivamente sancionado.

Dios guarde al señor presidente.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.

—A sus antecedentes.

IV

Comunicaciones oficiales

El Concejo Deliberante de Río Gallegos, Santa Cruz, manifiesta su adhesión a la iniciativa del gobierno provincial en la sanción de una ley nacional de promoción económica. (*A la Comisión de Economía.*)

—La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco informa sobre la situación judicial de un ciudadano. (*A la Comisión de Derechos y Garantías.*)

—La Universidad Nacional de La Plata expresa su oposición a la creación de un centro de estudios médicos en la provincia de San Luis. (*A la Comisión de Educación.*)

—La Gobernación de La Pampa solicita se incluya a dicha provincia en el régimen de fomento de la región patagónica. (*A sus antecedentes.*)

—La Presidencia de la Primera Jornada de Comisiones de Hacienda y Presupuesto de provincias con gobierno justicialista emite declaración relacionada con las economías regionales y coparticipación federal de impuestos. (*A las comisiones de Economías Regionales y de Presupuesto y Hacienda.*)

—La Misión de la Liga de los Estados Arabes denuncia agresión racista en Africa del Sur. (*A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.*)

—El Concejo Deliberante de General Paz, Buenos Aires, manifiesta su adhesión a la resolución del Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, por la que se solicita la implementación de un vademécum de monodrogas de aplicación obligatoria. (*A la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública.*)

—El Tribunal de Cuentas de la Nación comunica su insistencia en el cumplimiento de un decreto del Poder Ejecutivo nacional. (*A las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales.*)

—El Tribunal de Cuentas de la Nación comunica su insistencia en el cumplimiento de un decreto de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación. (*A las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales.*)

—El Concejo Deliberante de San Julián, Santa Cruz, comunica su apoyo al proyecto de ley para la provisión de agua potable a Puerto San Julián. (*A sus antecedentes.*)

—La embajada argentina en Italia expresa su apoyo a la aprobación del acuerdo de cooperación económica, industrial y financiera con dicha República. (*A sus antecedentes.*)

—El Tribunal de Cuentas de la Nación comunica su insistencia en el cumplimiento de una resolución emanada del Ministerio de Bienestar Social. (*A las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales.*)